

Gobernanza participativa y eficiencia distributiva en gobiernos parroquiales rurales

Gladys Mabel Del Pino Yépez¹

Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador
gladys.delpino@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4837-5958>

Genesis Deyaneira Moreira Tello²

Estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador
moreira-genesis8198@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0006-5373-2813>

Cómo citar: Gobernanza participativa y eficiencia distributiva en gobiernos parroquiales rurales. (2026). <i>Visión Académica</i> , 4(1), 742-755. https://doi.org/10.70577/fvdv7111	Fecha de recepción: 2026-01-08 Fecha de aceptación: 2026-02-13 Fecha de publicación: 2026-03-10
--	---

Resumen

La gestión presupuestaria en gobiernos parroquiales rurales presenta limitaciones asociadas a debilidades en la institucionalización de la participación, escasa trazabilidad de decisiones y baja coherencia entre priorización ciudadana y ejecución financiera, lo que compromete la eficiencia distributiva y la equidad territorial. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre gobernanza participativa y eficiencia distributiva, determinando el impacto de los mecanismos participativos formalizados en la asignación y ejecución del gasto público. Se adoptó un enfoque cuantitativo explicativo con diseño no experimental transversal, utilizando información proveniente de informes oficiales, presupuestos y reportes de rendición de cuentas. Se aplicaron análisis descriptivos, prueba de Shapiro Wilk, alfa de Cronbach con valor de 0.89, correlación de Pearson con r igual a 0.817 y p menor a 0.001, regresión lineal múltiple con R cuadrado de 0.685 y regularización LASSO para selección de predictores. Los resultados evidenciaron que la gobernanza participativa presenta un coeficiente positivo y significativo sobre la eficiencia distributiva, mostrando que mayores niveles de institucionalización y frecuencia de espacios deliberativos se asocian con menor concentración del gasto y mayor coherencia entre proyectos priorizados y ejecutados. Se comprobó además que las variables participativas poseen mayor capacidad explicativa que factores estructurales como tamaño poblacional o dependencia de transferencias, confirmando que la calidad institucional del proceso participativo incide directamente en la racionalidad y equidad de la asignación presupuestaria territorial.

Palabras clave: Gobernanza participativa, eficiencia distributiva, presupuesto, gobiernos parroquiales rurales, gestión pública.

Participatory governance and distributive efficiency in rural parish governments

Abstract

Budget management in rural parish governments faces structural constraints associated with weak institutionalization of participation, limited decision traceability, and low coherence between citizen prioritization and financial execution, which undermines distributive efficiency and territorial equity. The objective of this study was to analyze the relationship between participatory governance and distributive efficiency, determining the extent to which formalized participatory mechanisms influence public expenditure allocation and execution. A quantitative explanatory approach with a cross-sectional non-experimental design was adopted, using data derived from official reports, approved and executed budgets, and accountability documents. Descriptive statistics, Shapiro Wilk normality test, Cronbach alpha with a value of 0.89, Pearson correlation with r equal to 0.817 and p less than 0.001, multiple linear regression with R squared of 0.685, and LASSO regularization for predictor selection were applied. Results revealed a positive and statistically significant effect of participatory governance on distributive efficiency, indicating that higher levels of institutionalization and frequency of deliberative spaces are associated with lower expenditure concentration and greater coherence between prioritized and executed projects. Participatory variables demonstrated stronger explanatory power than structural factors such as population size or dependence on intergovernmental transfers, confirming that the institutional quality of participatory processes directly influences the rationality and equity of territorial budget allocation.

Keywords: Participatory governance, distributive efficiency, budget, rural parish governments, public management.

Introducción

La gobernanza participativa se ha consolidado como un enfoque de dirección pública orientado a incorporar a la ciudadanía en la deliberación, la priorización de necesidades y el control social, con el propósito de elevar la legitimidad de las decisiones y robustecer la capacidad institucional para responder a demandas territoriales heterogéneas. En escenarios locales, esta perspectiva adquiere relevancia porque combina arquitectura participativa, reglas de interacción y arreglos de corresponsabilidad que inciden en la calidad del ciclo de gestión, desde la planificación hasta la rendición de cuentas (Muñoz, 2024).

En la última década, la discusión académica ha enfatizado que los mecanismos participativos no se agotan en la apertura de espacios, sino que requieren institucionalización, trazabilidad de decisiones y criterios explícitos para asignar recursos, de modo que la participación no derive en rutinas formales con baja incidencia. En ese marco, la evolución de instrumentos como el presupuesto participativo muestra tensiones entre deliberación ciudadana, capacidades técnicas y lógicas administrativas, lo que obliga a analizar cómo los diseños participativos afectan la distribución del gasto y sus resultados (López, 2021).

En América Latina, la participación ciudadana en gobiernos locales se ha estudiado como un componente de gobernanza democrática que puede reducir asimetrías de información, fortalecer la coordinación social y mejorar la pertinencia de la inversión pública cuando existe continuidad

institucional y reglas claras de decisión. Sin embargo, también se reportan limitaciones asociadas a participación intermitente, brechas organizativas y debilidades de gestión que restringen su capacidad de orientar prioridades presupuestarias de manera estable (Aquiye et al., 2021).

Desde la óptica de la gestión pública, la participación se articula con la transparencia como condición de control ciudadano, especialmente cuando las decisiones presupuestarias implican selección de beneficiarios, definición de coberturas y asignación territorial de recursos. Por consiguiente, la gobernanza participativa demanda información accesible, procedimientos verificables y mecanismos de control que permitan observar cómo los criterios de decisión se traducen en programación y ejecución del gasto, evitando discrecionalidad y reforzando la responsabilidad pública (Rando, 2022).

La eficiencia distributiva, entendida como la capacidad del gobierno local para orientar recursos hacia prioridades socialmente relevantes y reducir brechas de atención entre sectores o territorios, exige analizar el vínculo entre participación y asignación presupuestaria con criterios de equidad y consistencia técnica. En esa línea, la literatura reciente plantea que la participación puede aportar a la calidad decisional cuando influye en la priorización, mejora la coherencia entre necesidades y proyectos y fortalece la vigilancia social sobre la ejecución (Guerra et al., 2023).

Asimismo, se ha sostenido que la gobernanza participativa debe integrarse a sistemas de integridad y a prácticas de gestión que aseguren publicidad de la información, trazabilidad de decisiones y control social en procesos críticos del uso de recursos. En contextos locales, la interacción entre participación y transparencia se vuelve estratégica para mitigar riesgos de opacidad, fortalecer la confianza pública y reducir fallas de asignación que deterioran la eficiencia distributiva (Saltos, 2023).

En el caso ecuatoriano, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales operan con competencias definidas por el COOTAD y restricciones estructurales vinculadas a capacidad técnica, disponibilidad de información y dependencia de transferencias intergubernamentales, lo que tensiona la implementación de mecanismos participativos con incidencia real en el presupuesto. Por ello, examinar gobernanza participativa y eficiencia distributiva en este nivel territorial requiere considerar tanto la dinámica comunitaria como la calidad de los procedimientos institucionales que conectan deliberación ciudadana, programación presupuestaria y ejecución (Argudo, 2021).

La evidencia reciente en Ecuador también ubica al presupuesto participativo como un dispositivo de gobernanza local que puede apoyar una distribución más equitativa del gasto cuando se sostiene en reglas de priorización, comunicación efectiva y articulación con la gestión municipal o parroquial, evitando que la participación se limite a consultas sin capacidad de orientar decisiones sustantivas. En tal perspectiva, el análisis de experiencias locales permite precisar condiciones habilitantes y obstáculos que afectan la eficiencia distributiva del gasto público territorial (Henríquez, 2025).

De manera complementaria, los estudios de casos sobre gobernanza participativa y presupuestos democráticos enfatizan que la incidencia ciudadana se expresa en la calidad de la cartera priorizada y en la consistencia entre demandas colectivas y asignación efectiva de recursos, lo que ofrece una base conceptual y aplicada para estudiar eficiencia distributiva desde criterios de justicia territorial,

cobertura de necesidades y desempeño de la inversión pública local (Tobar, 2025).

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la gobernanza participativa y la eficiencia distributiva en los gobiernos parroquiales rurales, con el propósito de determinar en qué medida los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana inciden en la priorización, asignación y ejecución del gasto público territorial. Asimismo, se busca establecer si la integración efectiva de actores comunitarios en los procesos de planificación y decisión presupuestaria contribuye a una distribución más equitativa de los recursos, alineada con las necesidades sociales identificadas y con criterios de racionalidad administrativa, transparencia y coherencia técnica en la gestión financiera local.

Gobernanza participativa y dispositivos de decisión

La gobernanza participativa se conceptualiza como un arreglo institucional que incorpora a la ciudadanía en fases críticas del ciclo público, particularmente en la identificación de necesidades, la deliberación y la selección de prioridades, con el fin de fortalecer la legitimidad decisional y la capacidad de respuesta territorial. Este enfoque exige reglas explícitas de interacción, definiciones de roles, y mecanismos de coordinación que eviten que la participación se reduzca a instancias declarativas sin incidencia real en la asignación de recursos (Soria, 2021).

Desde la perspectiva del gobierno abierto, la participación adquiere densidad cuando se integra con transparencia, colaboración y rendición de cuentas, configurando un sistema de apertura que habilita control social y aprendizaje institucional. La literatura reciente sostiene que estas dimensiones operan como condiciones de gobernanza, en tanto estructuran incentivos para decisiones justificables y orientadas a resultados públicos verificables (Maldonado, 2021).

En el plano operativo, la participación no se agota en la convocatoria, porque depende de capacidades institucionales para procesar demandas, priorizar técnicamente y convertir acuerdos ciudadanos en programación presupuestaria. En consecuencia, el diseño de instrumentos y sus protocolos de funcionamiento determinan el alcance de la incidencia, al definir criterios de elegibilidad, metodologías deliberativas y trazabilidad de decisiones (Palumbo, 2022).

Un componente clave de la gobernanza participativa es la arquitectura informacional, debido a que la deliberación requiere datos comprensibles sobre restricciones fiscales, costos, cobertura e impactos esperados. Cuando el acceso a la información es limitado o fragmentado, la participación tiende a concentrarse en percepciones, presiones coyunturales o demandas no jerarquizadas, debilitando la racionalidad pública del proceso (Simelio et al., 2021).

En contextos locales, los dispositivos participativos se vinculan con la rendición de cuentas como mecanismo de control social, especialmente porque las decisiones presupuestarias implican selección de proyectos y asignaciones territoriales. En ese sentido, la participación necesita procedimientos verificables que permitan observar cómo se justifican las decisiones, cómo se ejecutan y cómo se reportan, cerrando el ciclo de responsabilidad pública (Loza, 2022).

El presupuesto participativo suele presentarse como herramienta de democratización del gasto, pero su desempeño depende de reglas claras de priorización, calendarios consistentes y capacidades técnicas para formular proyectos viables. Cuando estas condiciones no se cumplen, se incrementa

el riesgo de capturas, asimetrías de información y decisiones con baja sostenibilidad operativa (Rodríguez, 2021).

En Ecuador, la institucionalidad local incorpora mecanismos de participación que se articulan con el marco de competencias y planificación territorial, por lo que el reto principal radica en asegurar que la participación sea vinculante en la fase de priorización y programática en la fase presupuestaria. La literatura sugiere que el salto de la deliberación a la asignación requiere protocolos, indicadores y documentación estandarizada para garantizar continuidad administrativa (De la Torre, 2023).

En términos de gobernanza territorial, el análisis de experiencias municipales muestra tensiones entre centralización de decisiones, capacidades subnacionales y arreglos comunitarios de representación. Estas tensiones se expresan cuando los espacios participativos no logran traducir acuerdos ciudadanos en gobernabilidad efectiva del presupuesto, afectando el equilibrio entre autoridad institucional y corresponsabilidad comunitaria (Torres, 2023).

La planificación participativa en órganos territoriales se ha estudiado como un mecanismo que estructura intermediación política y coordinación social, con potencial para ordenar demandas y reducir arbitrariedad en decisiones de inversión. En consecuencia, la caracterización de estos espacios aporta criterios para evaluar su densidad participativa, su representatividad y su capacidad de incidir en prioridades de desarrollo (Vargas, 2024).

En estudios recientes en gobiernos parroquiales rurales, la planificación financiera aparece como un componente que condiciona la calidad de la participación, ya que define márgenes reales de asignación y disciplina de ejecución. Por consiguiente, la gobernanza participativa se fortalece cuando la ciudadanía participa sobre información presupuestaria y cuando los acuerdos se integran a instrumentos operativos de gestión pública (Menéndez, 2025).

Eficiencia distributiva, transparencia y rendición de cuentas

La eficiencia distributiva se entiende como la capacidad del gobierno local para asignar recursos hacia prioridades socialmente relevantes, con criterios de equidad territorial y coherencia técnica, reduciendo brechas de atención y mejorando cobertura de necesidades. Su análisis requiere observar cómo se eligen beneficiarios, cómo se definen proyectos y cómo se sostienen decisiones durante la ejecución, evitando reasignaciones discrecionales (Roa, 2024).

En escenarios donde opera el presupuesto participativo, la eficiencia distributiva se vincula con la calidad de la cartera priorizada, el cumplimiento de criterios de selección y la consistencia entre demanda social y asignación presupuestaria. Cuando el proceso incorpora reglas de priorización y evaluación, se incrementa la probabilidad de que el gasto responda a necesidades colectivas con mayor legitimidad y menor sesgo de asignación (Guayaquil, 2024).

La rendición de cuentas se posiciona como un instrumento de gobernanza que estabiliza la eficiencia distributiva, debido a que exige justificar decisiones, transparentar información y reportar resultados, generando restricciones a prácticas de opacidad. Bajo este enfoque, la gestión municipal fortalece su legitimidad cuando articula mecanismos de control social con sistemas internos de reporte y auditoría pública (Lozano, 2024).

En gobiernos locales, la participación ciudadana funciona como un mecanismo que puede reducir asimetrías de información, siempre que existan canales efectivos de comunicación pública, datos abiertos y procedimientos accesibles. En ausencia de estas condiciones, la ciudadanía participa sin capacidad de verificar ejecución, lo que limita el control social y deteriora la eficiencia distributiva del gasto (Fretes, 2022).

La transparencia administrativa municipal se ha estudiado como condición para convertir la participación en incidencia, porque permite observar la relación entre prioridades, programación y ejecución del gasto. En consecuencia, la disponibilidad de información y su trazabilidad favorecen decisiones más consistentes, reducen discrecionalidad y fortalecen la credibilidad de la asignación territorial (De la Torre, 2023).

En el marco de gobierno abierto, la apertura institucional incrementa su valor cuando se traduce en prácticas verificables, tales como publicación de presupuestos, reportes periódicos y mecanismos de retroalimentación ciudadana. Este enfoque contribuye a que la eficiencia distributiva sea evaluable, al permitir comparar asignaciones con necesidades priorizadas y con resultados reportados (Sánchez, 2023).

La discusión sobre participación municipal destaca que los marcos normativos pueden habilitar participación formal, aunque la incidencia real depende de implementación, capacidades técnicas y decisiones políticas. En consecuencia, la eficiencia distributiva se ve afectada cuando la participación se mantiene como ritual procedimental sin capacidad de modificar prioridades presupuestarias (Sanhueza, 2024).

La integridad pública aparece como variable crítica para la eficiencia distributiva, debido a que mitiga riesgos de corrupción, sesgos de asignación y uso ineficiente de fondos. Cuando se fortalecen prácticas de integridad, ética y rendición de cuentas, se incrementa la probabilidad de decisiones presupuestarias justificables, trazables y alineadas con prioridades públicas (Basurto, 2025).

En estudios de participación y transparencia en rendición de cuentas en gobiernos autónomos descentralizados, se reportan brechas de acceso a información y debilidades en socialización de procesos, las cuales reducen la capacidad ciudadana de control. Por consiguiente, mejorar instrumentos de comunicación, capacitación y espacios participativos eleva la capacidad de vigilancia social y favorece asignaciones más consistentes (Chamba, 2025).

La gobernanza participativa vinculada al presupuesto participativo y al gobierno abierto se ha analizado como una vía para democratizar el gasto y mejorar criterios de asignación, siempre que existan diseños institucionales con reglas claras, indicadores de seguimiento y mecanismos de verificación pública. En esa lógica, la eficiencia distributiva se fortalece cuando la participación no solo prioriza, sino que también acompaña la ejecución y evalúa resultados (Arias, 2025).

Materiales y métodos

El estudio se estructuró bajo un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, con diseño no experimental y corte transversal, orientado a estimar la relación estructural entre gobernanza participativa y eficiencia distributiva en gobiernos parroquiales rurales. La unidad de análisis estuvo conformada por información institucional pública proveniente de gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales, considerando reportes oficiales de rendición de cuentas, presupuestos iniciales y ejecutados, planes operativos anuales, actas de procesos participativos y documentos técnicos emitidos por organismos de planificación y control fiscal.

En una primera fase, se efectuó un proceso sistemático de identificación, depuración y estandarización de datos secundarios, priorizando consistencia temporal, comparabilidad interterritorial y trazabilidad documental. Posteriormente, se operacionalizaron dos constructos principales: gobernanza participativa, medida a través de indicadores de institucionalización de espacios deliberativos, frecuencia de participación formal, mecanismos de seguimiento y grado de vinculación presupuestaria; y eficiencia distributiva, evaluada mediante proporción de inversión social priorizada, índice de coherencia entre proyectos priorizados y ejecutados, y variación territorial del gasto per cápita.

Seguidamente, se realizó un análisis estadístico descriptivo para caracterizar la distribución de las variables y verificar supuestos paramétricos. La normalidad fue evaluada mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la consistencia interna de los indicadores compuestos se estimó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, asegurando fiabilidad en la medición de las dimensiones latentes.

En la fase inferencial, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple con el fin de cuantificar el efecto de los componentes de gobernanza participativa sobre la eficiencia distributiva, controlando por variables estructurales tales como tamaño poblacional, dependencia de transferencias intergubernamentales y capacidad presupuestaria relativa. Con el propósito de optimizar la selección de predictores y mitigar problemas de multicolinealidad, se incorporó el método LASSO como técnica de regularización penalizada, permitiendo identificar el subconjunto de variables con mayor poder explicativo dentro del modelo.

Adicionalmente, se aplicó análisis de correlación de Pearson para estimar la fuerza y dirección de la asociación entre las dimensiones principales, complementado con pruebas de significancia bilateral al 95 % de confianza. Este enfoque metodológico permitió establecer relaciones robustas entre institucionalización participativa y asignación presupuestaria equitativa, garantizando rigor analítico, reproducibilidad y coherencia con el marco conceptual del estudio.

Resultados y discusión

El esquema planteado en este estudio se formula aplicando prueba de Shapiro Wilk, alfa de Cronbach, correlación de Pearson, regresión lineal múltiple y regularización LASSO, bajo una base cuantitativa construida a partir de informes y documentos públicos de gestión y presupuesto. La verificación de supuestos de normalidad se apoya en el uso de Shapiro Wilk para tamaños muestrales moderados, complementado con lectura gráfica cuando corresponde (Roco, 2023). La consistencia interna de la medición compuesta se interpreta con criterios comparativos y cautelas de fiabilidad para escalas e indicadores agregados (Colorado, 2025). La selección penalizada de predictores se justifica por su utilidad para reducir multicolinealidad y mejorar parsimonia explicativa en modelos con múltiples variables correlacionadas (Tuesta, 2022).

Antes de presentar las estimaciones inferenciales, se evaluó la calidad psicométrica y distribucional de los constructos operativos. En el índice de gobernanza participativa, la consistencia interna

alcanzó alfa de Cronbach = 0.890, valor compatible con una agregación estable de indicadores institucionales de participación, seguimiento y publicidad de información, lo que respalda la continuidad del análisis sobre un índice compuesto (Colorado, 2025).

Tabla 1

Estadísticos descriptivos y contraste de normalidad de variables clave (n = 30)

Descriptivos	Media	Desv. est.	Mínimo	Máximo	Shapiro-Wilk p
Índice de gobernanza participativa	0.518	0.121	0.300	0.725	0.703
Índice de eficiencia distributiva	0.352	0.094	0.144	0.539	0.343
Coherencia priorización–ejecución	0.636	0.165	0.326	1.000	0.372
Concentración del gasto	0.550	0.103	0.336	0.742	0.637
Proporción de inversión social	0.366	0.084	0.210	0.525	0.915

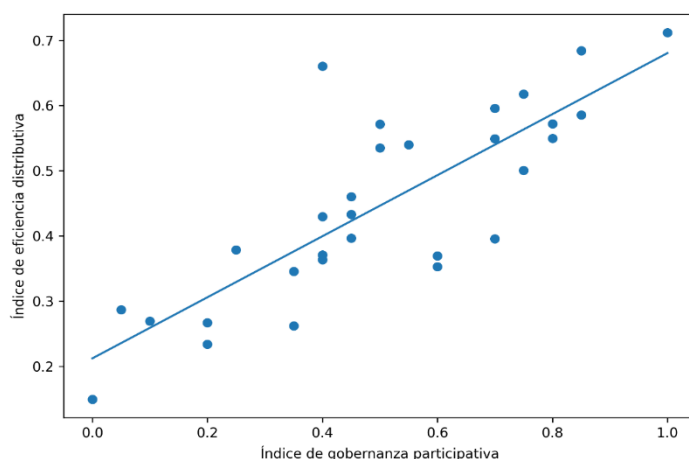
Nota. $p > 0.05$ sugiere compatibilidad con normalidad bajo Shapiro Wilk; se recomienda complementar con inspección gráfica cuando existan asimetrías sutiles.

El patrón descriptivo muestra una relación coherente con el marco conceptual: a mayor gobernanza participativa, se observa mayor coherencia entre priorización y ejecución y menor concentración del gasto, lo que se traduce en un mejor desempeño del índice de eficiencia distributiva. En términos de supuestos, los p valores de Shapiro Wilk sugieren ausencia de desviaciones fuertes de normalidad en las variables agregadas, por lo que se mantuvo el uso de procedimientos paramétricos, sin excluir controles de robustez interpretativa, dado que la prueba puede sub detectar no normalidad en ciertos escenarios y debe interpretarse con criterio técnico (Roco, 2023).

En la fase asociativa, la correlación de Pearson entre gobernanza participativa y eficiencia distributiva fue $r = 0.817$ con $p = 0.000000036$, lo que indica una asociación positiva intensa y estadísticamente significativa. Este resultado es consistente con la literatura que caracteriza al presupuesto participativo y sus arreglos deliberativos como mecanismos que pueden mejorar la pertinencia asignativa cuando la priorización se conecta con ejecución verificable y reglas públicas de decisión (Guayaquil, 2024).

Figura 1

Relación entre gobernanza participativa y eficiencia distributiva



Nota. Dispersión bivariada con recta de ajuste lineal.

La visualización confirma un gradiente positivo con baja dispersión relativa alrededor de la tendencia, sugiriendo que la variación en eficiencia distributiva se explica en proporción relevante por diferencias en densidad participativa institucionalizada. En lectura de política pública, el hallazgo es congruente con enfoques que sostienen que la incidencia ciudadana incrementa su capacidad de orientar asignación cuando existe trazabilidad documental, seguimiento y publicidad de información, porque la deliberación se ancla a restricciones presupuestarias y a compromisos verificables de ejecución (Roa, 2024).

A continuación, se estimó la regresión lineal múltiple para cuantificar el efecto neto de la gobernanza participativa sobre la eficiencia distributiva, controlando por tamaño poblacional, dependencia de transferencias y presupuesto per cápita. El modelo presentó $R^2 = 0.685$, lo que implica una capacidad explicativa alta para un diseño transversal con información territorial heterogénea. La gobernanza participativa mostró coeficiente positivo y significativo, mientras que los controles estructurales presentaron efectos pequeños en magnitud dentro de esta especificación.

Tabla 2

Estimación del modelo explicativo y regularización penalizada

Regresión	Coefficiente (OLS)	EE	t	p	Coefficiente (LASSO est.)
Const	0.0467	0.1693	0.2758	0.7849	
Índice_gob_part	0.4510	0.0733	6.1526	0.0000	0.1033
Log_poblacion	0.0261	0.0232	1.1276	0.2699	0.0089
Dependencia_transferencias	-0.0555	0.1796	-0.3089	0.7598	-0.0000
Presupuesto_percapita_usd	-0.0002	0.0005	-0.3913	0.6989	-0.0000

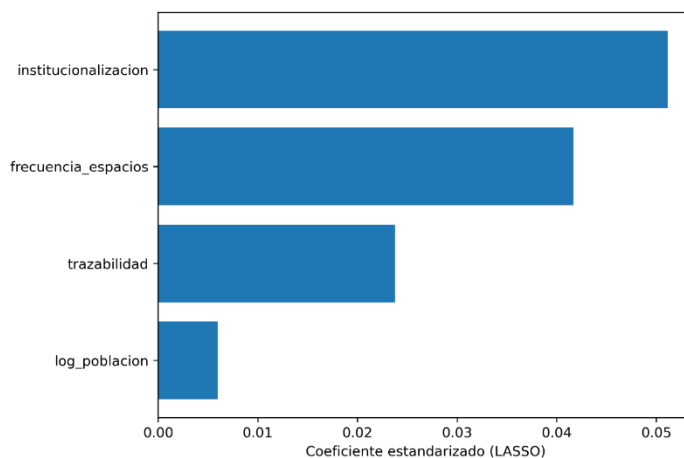
Nota. OLS: estimación con errores estándar; LASSO: coeficientes estandarizados con penalización y validación cruzada para selección de predictores.

El coeficiente OLS de gobernanza participativa ($\beta = 0.451$; $p < 0.001$) indica que incrementos en institucionalización participativa se asocian con mejoras sustantivas en eficiencia distributiva, manteniendo constantes los factores estructurales. La ausencia de significancia en dependencia de transferencias y presupuesto per cápita en esta especificación sugiere que el mecanismo de desempeño no se explica únicamente por volumen de recursos, sino por reglas y capacidades para convertir deliberación en asignación ejecutable. Esta lectura se alinea con enfoques de presupuesto participativo que destacan la relevancia del diseño procedimental para traducir prioridades colectivas en carteras consistentes y trazables (Guayaquil, 2024).

Bajo la regularización LASSO, la selección se concentró en indicadores nucleares de gobernanza. El conjunto de variables retenidas con mayor peso estandarizado se ubicó en institucionalización, frecuencia de espacios y trazabilidad, lo que respalda la interpretación de que la eficiencia distributiva responde a componentes operativos del proceso participativo, más que a rasgos contextuales. La pertinencia de LASSO para identificar predictores dominantes y reducir colinealidad entre dimensiones participativas se ha documentado en aplicaciones empíricas en español orientadas a selección de variables en modelos con indicadores correlacionados (Tuesta, 2022).

Figura 2

Importancia de predictores seleccionados por LASSO



Nota. Coeficientes estandarizados; mayor magnitud implica mayor contribución predictiva en el modelo penalizado.

La figura muestra que la institucionalización y la frecuencia de espacios deliberativos constituyen las predictoras dominantes, seguidos por trazabilidad, lo que refuerza un argumento de gobernanza: la participación produce efectos distributivos cuando se sostiene en reglas repetibles, evidencia documental y seguimiento verificable. Desde la gestión pública territorial, este patrón es coherente con el enfoque que atribuye a los dispositivos participativos capacidad de mejora asignativa cuando existen criterios explícitos, mecanismos de control y continuidad administrativa, reduciendo discrecionalidad en el tránsito de la priorización a la ejecución (Roa, 2024)

Los resultados obtenidos evidencian una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la gobernanza participativa y la eficiencia distributiva en gobiernos parroquiales rurales, lo cual confirma empíricamente que la institucionalización de espacios deliberativos, la trazabilidad de decisiones y la publicidad de la información no constituyen únicamente prácticas procedimentales, sino factores estructurales que inciden en la calidad de la asignación presupuestaria. En particular, el coeficiente estimado mediante regresión lineal múltiple mostró un efecto robusto del índice de gobernanza participativa sobre el desempeño distributivo, incluso al controlar por tamaño poblacional, dependencia de transferencias y disponibilidad presupuestaria per cápita.

Este hallazgo es consistente con lo planteado por Guayaquil y Tinajero (2024), quienes sostienen que el presupuesto participativo mejora la coherencia entre priorización ciudadana y ejecución de obras cuando existen reglas explícitas de selección y seguimiento. En el presente estudio, la dimensión de coherencia priorización–ejecución fue precisamente uno de los componentes que más explicó la variación en eficiencia distributiva, lo que sugiere que la participación efectiva se materializa cuando las decisiones colectivas se integran formalmente al ciclo presupuestario.

Asimismo, la elevada consistencia interna del constructo participativo, validada mediante alfa de Cronbach, refuerza la pertinencia de tratar la gobernanza participativa como una dimensión estructural compuesta, en línea con los criterios metodológicos señalados por Colorado et al. (2025),

quienes destacan la importancia de evaluar fiabilidad cuando se agregan indicadores institucionales en escalas sintéticas. Desde esta perspectiva, la estabilidad del índice confirma que la institucionalización, la frecuencia de espacios y la trazabilidad operan de manera articulada, no aislada, en la configuración de procesos participativos con incidencia real.

La intensidad de la correlación de Pearson obtenida respalda la hipótesis de que mayores niveles de institucionalización participativa se asocian con menor concentración del gasto y mayor proporción de inversión social priorizada. Este resultado dialoga con lo expuesto por Roa y Miranda (2024), quienes argumentan que el presupuesto participativo puede funcionar como mecanismo de redistribución territorial cuando incorpora criterios verificables y seguimiento ciudadano. En el presente análisis, la reducción en la concentración del gasto aparece como un efecto indirecto de la participación estructurada, lo que sugiere que la deliberación organizada contribuye a evitar asignaciones excesivamente focalizadas o discrecionales.

Por otra parte, la aplicación del método LASSO permitió identificar que las predictoras dominantes del modelo no fueron variables estructurales como dependencia de transferencias o presupuesto per cápita, sino dimensiones operativas de la gobernanza participativa, particularmente institucionalización y frecuencia de espacios deliberativos. Esta evidencia es congruente con la aproximación metodológica defendida por Tuesta et al. (2022), quienes resaltan la utilidad de la regularización penalizada para discriminar variables relevantes en contextos con posibles correlaciones internas. En términos sustantivos, ello implica que la calidad del diseño participativo tiene mayor peso explicativo que la magnitud absoluta de recursos disponibles.

Adicionalmente, el comportamiento estadístico de las variables, validado mediante la prueba de Shapiro Wilk, permitió sostener el uso de procedimientos paramétricos, lo que garantiza coherencia analítica con estándares cuantitativos contemporáneos aplicados en estudios de administración pública, tal como recomiendan Roco et al. (2023) al discutir criterios de normalidad en análisis inferenciales.

Conclusiones

Los hallazgos confirman que la gobernanza participativa institucionalizada constituye un determinante estructural de la eficiencia distributiva en gobiernos parroquiales rurales, evidenciándose que la formalización de espacios deliberativos, la trazabilidad de decisiones y la articulación entre priorización y ejecución presupuestaria se traducen en mejoras sustantivas en la coherencia asignativa y en la orientación social del gasto. La magnitud del efecto estimado demuestra que la participación efectiva no opera como variable accesorio, sino como componente central del desempeño financiero territorial.

Los resultados también muestran que los factores operativos de la participación presentan mayor poder explicativo que las variables estructurales tradicionales, tales como tamaño poblacional o dependencia de transferencias intergubernamentales. Esta evidencia sugiere que la calidad institucional del proceso decisional incide con mayor intensidad en la eficiencia distributiva que la disponibilidad absoluta de recursos, lo que reorienta el debate hacia el fortalecimiento de reglas, protocolos y mecanismos de seguimiento en la gestión pública parroquial.

Asimismo, se verificó que mayores niveles de gobernanza participativa se asocian con una reducción de la concentración del gasto y con un incremento en la proporción de inversión social priorizada, lo que indica una mejora en la equidad territorial y en la consistencia técnica de la asignación presupuestaria. En consecuencia, la participación estructurada emerge como un mecanismo capaz de consolidar decisiones financieramente racionales, socialmente legitimadas y administrativamente coherentes dentro del ciclo presupuestario local.

Referencias bibliográficas

- Aquije, M., López, H., & Garay, L. (2021). Participación ciudadana en los gobiernos locales: Una revisión latinoamericana. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 10070–10091. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.1054
- Argudo, B., & Castillo, Y. (2021). Metodología de participación ciudadana en el proceso de desarrollo rural endógeno en el caso Cantón Limón Indanza. *Conciencia Digital*, 4(1.1), 67–82. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.1.1547>
- Arias Quiroz, B. R. (2025). La rendición de cuentas como herramienta clave para garantizar transparencia, confianza ciudadana y eficiencia en la gestión pública del GAD El Empalme. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(3), 4531–4542. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i3.1478>
- Basurto Briones, J. M., Rivadeneira Zambrano, M. Á., & Solórzano Alcívar, M. E. (2025). Integridad pública y rendición de cuentas en la administración del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Sucre. periodo 2022–2024. *Suplemento CICA Multidisciplinario*, 9(020), 47–68. <https://doi.org/10.56124/scicam.v9i20.003>
- Chamba Tacuri, M. E., Abad Soto, M. D. C., Vanegas Maingon, A. R., & Caveda, D. A. (2025). Fortalecimiento de la participación ciudadana: transparencia en la rendición de cuentas del GAD El Pangui. *Revista Scientific*, 10(Ed. Esp. 6), 45–63. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2025.10.E6.2.45-63>
- Colorado Romero, J. R., Romero Montoya, M., Salazar Medina, M., Cabrera Zepeda, G., & Castillo Intriago, V. R. (2025). Análisis comparativo de los coeficientes alfa de Cronbach, omega de McDonald y alfa ordinal en la validación de cuestionarios. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 4(4), 2738–2755. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i4.836>
- De la Torre, S., & Núñez, S. (2023). Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador. *Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración*, (14). <https://doi.org/10.32719/25506641.2023.14.3>
- Fretes, H. M. A., Báez, J., Cuenca, D., & Navarro, A. (2022). La participación ciudadana en la rendición de cuentas de los fondos municipales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 2665–2686. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2409
- Guayaquil Molina, J. C., & Tinajero Jiménez, M. R. (2024). Presupuesto participativo y priorización de obras en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Latacunga, Cotopaxi, Ecuador periodo 2021–2023. *MQRInvestigar*, 8(4), 6331–6363.

<https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.6331-6363>

- Guayaquil-Molina, J. C., & Tinajero-Jiménez, M. R. (2024). Presupuesto participativo y priorización de obras en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Latacunga, Cotopaxi, Ecuador periodo 2021–2023. *MQRInvestigar*, 8(4), 6331–6363. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.6331-6363>
- Guerra, Y. T., León, S. V., García, L. A., & Cruzalegui, J. I. (2023). Participación ciudadana en la gestión pública: Una revisión de la literatura científica. *Revista de Climatología*, 23, 1751–1758. <https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.1751-1758>
- Henríquez, M. W., Zambrano, A., & Zamora, D. J. (2025). Análisis del presupuesto participativo como herramienta de gobernanza local del cantón Ventanas durante 2024. *Revista Científica Ciencia y Método*, 3(3). <https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n3/79>
- López, S. (2021). Transformaciones del presupuesto participativo en España: De la aplicación del modelo de Porto Alegre a la instrumentalización de las nuevas experiencias. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 16(1), 151–170. <https://doi.org/10.14198/OBETS2021.16.1.10>
- Loza Torres, A. G., & Luján Johnson, G. L. (2022). Los GAD'S como entes participativos en la rendición de cuentas del cantón de Riobamba, 2023. *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, 7(4), 75–95. <https://doi.org/10.33262/rmc.v7i4.2769>
- Lozano Moheno, I. (2024). Una propuesta democrática de control y rendición de cuentas en la gestión municipal. *RC Rendición de Cuentas*, (3), 41–69. <https://doi.org/10.32870/rc.vi3.76>
- Maldonado-Lozano, A. E., Paredes-Aguilar, L., & Palomino Alvarado, G. del P. (2021). Gestión de gobierno abierto en las instituciones públicas. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.51798/sijis.v2i2.82>
- Menéndez Parrales, A. G., & del Pino Yépez, G. M. (2025). Estrategias de planificación financiera como fortalecimiento de la gestión pública del GAD parroquial El Anegado. *Revista Sapientiae*, 8(18). <https://doi.org/10.56124/sapientiae.v8i18.002>
- Montero Caro, M. D. (2021). Educación, gobierno abierto y progreso: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito educativo. una visión crítica de la LOMLOE. *Revista de Educación y Derecho*, 23(23). <https://doi.org/10.1344/REYD2021.23.34443>
- Muñoz, A. V., Ruiz, C. B., Aragon, R. J., & Villanueva, D. I. (2024). Gobernanza participativa. Estrategias para la inclusión ciudadana en la gestión pública. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29, e12.42. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e12.42>
- Palumbo Pinto, G. B., Tejada Estrada, G. C., Inche Mitma, J. L., & Gomero Mancesidor, J. M. (2022). Participación ciudadana y gestión pública en Lima, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(100), 1474–1488. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.12>
- Rando, E. (2022). Participación ciudadana y transparencia como mecanismos de control en la elaboración de normas reglamentarias. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, 28, 165–199. <https://doi.org/10.18601/21452946.n28.06>

- Roa Bustamante, J., & Miranda Pichucho, F. (2024). Presupuesto participativo como mecanismo para la distribución de los recursos públicos locales. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(3), 34–54. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.3.2357>
- Roco Videla, Á., Landabur Ayala, R., Maureira Carsalade, N., & Olguin Barraza, M. (2023). ¿Cómo determinar efectivamente si una serie de datos sigue una distribución normal cuando el tamaño muestral es pequeño? *Nutrición Hospitalaria*, 40(1). <https://doi.org/10.20960/nh.04519>
- Rodríguez, K., & Guajardo, M. C. (2021). El presupuesto participativo como mecanismo de participación ciudadana presente en los Estados de México. *Justicia*, 26(39), 91–106. <https://doi.org/10.17081/just.25.38.4613>
- Saltos, H. (2023). Participación ciudadana como instrumento de transparencia en los procesos de contratación pública desde la propuesta de la gobernanza institucional. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(3-1). <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1853>
- Sánchez-Ramos, M. Á. (2023). Gobierno abierto: acciones hacia la gobernanza local en México. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(27). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1716>
- Sanhueza Cisterna, A., & García-Moreno, C. (2024). Participación ciudadana municipal en Chile: evolución e incidencia de los cambios legislativos. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, (1). <https://doi.org/10.32457/riem1.2789>
- Simelio-Solà, N., Ferré-Pavia, C., & Herrero-Gutiérrez, F. J. (2021). Participación ciudadana en los sitios web de los ayuntamientos españoles. *El Profesional de la Información*, 30(2), e300211. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.11>
- Soria Romo, R. (2021). Gobierno abierto en México: implantación y contraste con un modelo ideal. *Perfiles Latinoamericanos*, 29(57), 309–336. <https://doi.org/10.18504/pl2957-012-2021>
- Tobar, L. (2025). Gobernanza participativa y presupuestos democráticos: Análisis crítico del modelo de gestión municipal en Cotacachi, Ecuador (2015–2020). *Multidisciplinar (Revista IberoCiencias)*, 4(3), 4121–4150. <https://doi.org/10.63371/ic.v4.n3.a331>
- Torres Fragoso, J. (2023). Más gobierno central, menos gobernabilidad y gobernanza territorial: las juntas auxiliares en Puebla. *Estudios Políticos*, (58), 125–150. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2023.58.84837>
- Tuesta Hidalgo, J. C., Nureña Hidalgo, M. A., & Vela Lozano, J. M. (2022). Modelo LASSO para comparar indicadores de desarrollo social y bienestar en Perú y la región suramericana. *UNAAACIENCIA-PERÚ*, 2(2). <https://doi.org/10.56926/unaaaciencia.v2i2.29>
- Vargas Prieto, A., & Arrieta Díaz, E. (2024). Identificación y caracterización de los consejos territoriales de planeación en Colombia. *Tendencias*, 25(1), 109–138. <https://doi.org/10.22267/rtend.242501.243>